

Government at a Glance 2009

Summary in Spanish

Panorama del Gobierno 2009

Resumen en español

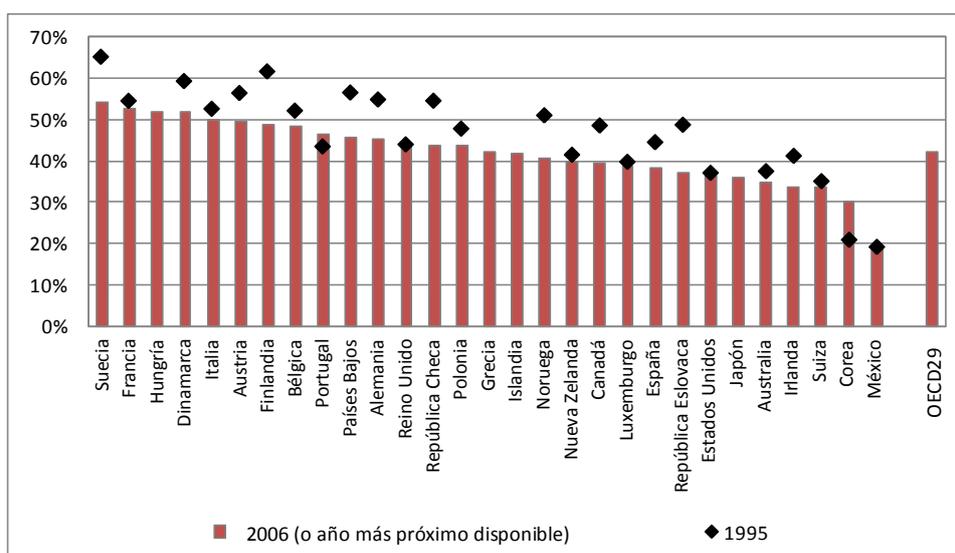
- *Panorama del Gobierno 2009* identifica varios retos clave para la gobernanza y saca a relucir cuestiones fundamentales a las que se enfrentan los gobiernos al reconsiderar sus funciones, capacidades y vulnerabilidades a la luz de la reciente crisis financiera y económica.
- Esta publicación proporciona indicadores que permiten iluminar la “caja negra” del funcionamiento de los gobiernos, incluyendo datos sobre su tamaño en términos de ingresos, gastos y empleo.
- Centrándose específicamente en la administración pública, *Panorama del Gobierno 2009* observa las principales políticas y prácticas en la gestión de recursos humanos, la gestión del presupuesto, la gestión regulatoria y la integridad.
- Los indicadores proporcionan claves para comprender la capacidad administrativa del gobierno para abordar desafíos presentes y futuros, así como las opciones que los gobiernos encaran cuando intentan reducir el déficit y la deuda pública.

Principales desafíos para la gobernanza

La capacidad de los gobiernos se está poniendo a prueba como nunca antes. Los responsables de la toma de decisiones se enfrentan a una combinación de retos políticos de un tamaño y una complejidad sin precedentes, desde el desempleo hasta el cambio climático, el envejecimiento de las poblaciones, la migración y otros asuntos a largo plazo. Los ciudadanos se dirigen a los gobiernos en busca de soluciones inmediatas a problemas complejos y exigen servicios públicos de alta calidad para satisfacer sus cambiantes circunstancias y necesidades.

Con independencia de las recientes intervenciones extraordinarias, el gobierno desempeña una función importante en la economía como una entidad que gasta dinero, recauda impuestos y emplea. Los gastos del gobierno alcanzan un promedio del 40% del producto interno bruto (PIB) en los países miembros de la OCDE (véase el Gráfico 1) y el gobierno empleó a cerca de 14% de los trabajadores. El gobierno es el actor principal en la sociedad moderna, al contribuir al crecimiento económico, proporcionar bienes y servicios, regular el comportamiento de las empresas y los individuos, y redistribuir el ingreso. Es fundamental que los gobiernos funcionen bien.

Gráfica 1. Gastos gubernamentales generales como porcentaje del PIB (1995 y 2006)



Por otra parte, a la vez que buscan abordar con rapidez las perspectivas financieras y económicas actuales, los gobiernos están repensando la manera de poner en marcha una estrategia de crecimiento a largo plazo que mejore la productividad y la competitividad. A medida que el mundo se interconecta cada vez más, los gobiernos necesitarán agilizarse para responder rápidamente a un entorno dinámico.

Sin duda, el ritmo de las reformas del sector público tendrá que acelerarse en las tres principales áreas descritas más adelante, a medida que los gobiernos respondan a los actuales desafíos financieros, económicos, ambientales y sociales. Los datos incluidos en *Panorama del Gobierno 2009* proporcionan información sobre el estado actual de varias reformas en estas áreas y ayudan a aclarar algunas de las difíciles decisiones a las que se enfrentan los gobiernos.

1. Consolidación fiscal y aumento de la eficiencia

La crisis económica actual ha debilitado profundamente la salud fiscal de casi todos los países. Muchos países presentan déficit presupuestarios insostenibles, lo que ha generado una fuerte presión para reducir el gasto público. La mayoría de estos mismos países también encaran otros desafíos graves a largo plazo –como el cambio demográfico, el cambio climático global y los pasivos contingentes gubernamentales– que también tienen el potencial de amenazar su sostenibilidad fiscal. Mientras que las expectativas de la sociedad con respecto al gobierno van en aumento, los recursos disponibles para satisfacerlas son cada vez más limitados. Bajo estas circunstancias, se ha vuelto más urgente repensar el papel del gobierno y el alcance de las actividades, así como mejorar la eficiencia y la eficacia del sector público.

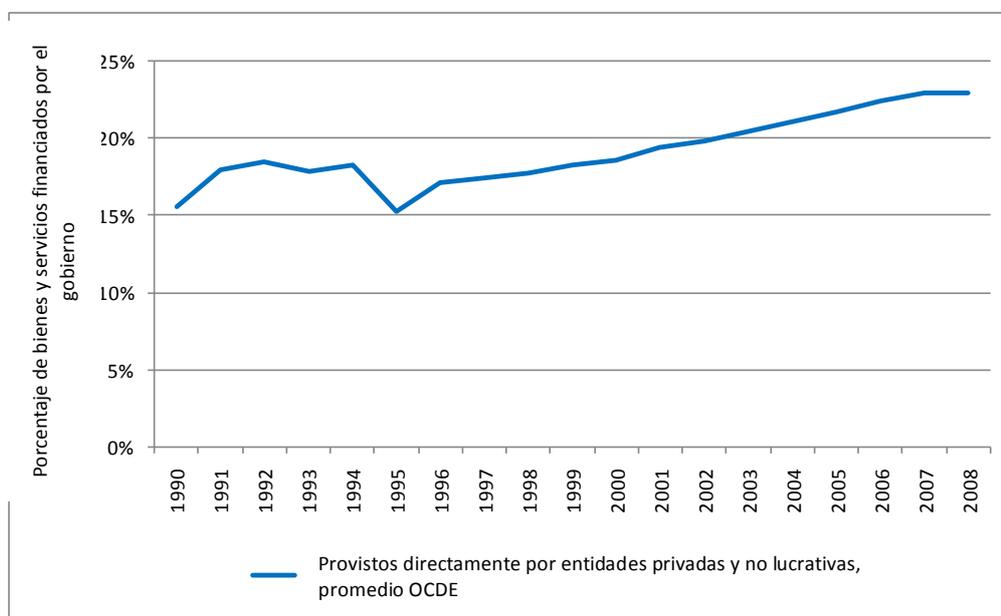
La mayoría de los países ya han implementado algunas reformas presupuestarias para generar una perspectiva a medio y largo plazos, y proporcionar incentivos para restringir el gasto público en el corto plazo. Sin embargo, la eficacia de estas reformas varía y se podría necesitar más acción para reforzar la disciplina fiscal.

- Todos los países miembros de la OCDE, excepto cinco, emplean normas fiscales de algún tipo (con frecuencia normas relativas a la deuda y al balance presupuestario) como una forma de limitar el gasto público.
- Durante la última década, las proyecciones fiscales se han vuelto cada vez más comunes entre los países miembros de la OCDE y en 2007 fueron utilizadas por 25 países. Cada año, más de la mitad de los países de la OCDE preparan proyecciones fiscales, cinco países lo hacen de manera periódica (cada tres a cinco años) y dos las elaboran cada vez que se requieren.
- En todos los países miembros de la OCDE, con excepción de Grecia, se realizan estimaciones del gasto público a medio plazo, en general en un nivel agregado.

Durante los últimos 20 años, los gobiernos han implementado reformas en todos los ámbitos de la administración pública para incrementar la eficacia; muchas de estas reformas implican la adopción de mecanismos de mercado y/o inversiones en tecnologías de la comunicación. A medida que los gobiernos continúan la búsqueda de una mayor eficiencia en el entorno actual de limitación de recursos, los partenariados con el sector privado para producir y distribuir bienes y servicios podrían aumentar, lo mismo que el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación.

- La subcontratación es común en los países de la OCDE; como promedio, 45% de los bienes y servicios utilizados en la producción gubernamental han sido subcontratados. No obstante, este porcentaje ha permanecido relativamente estable en los últimos 20 años.
- Los gobiernos están utilizando cada vez más a menudo entidades privadas y no lucrativas para proporcionar bienes y servicios directamente a los ciudadanos. En 2008, 23% de todos los bienes y servicios financiados por el gobierno fueron proporcionados directamente a los ciudadanos por actores privados, en comparación con el 15% de 1995. (Véase el Gráfico 2.)
- La provisión de servicios electrónicos por los gobiernos es alta en comparación con la baja utilización de los mismos por los ciudadanos, incluso en los países más avanzados en este ámbito, lo que sugiere que hay espacio para aumentar la eficiencia de la prestación de servicios en línea. Entre un 10% y un 60% de los ciudadanos de los países miembros de la OCDE utilizaron servicios electrónicos del gobierno en 2006, comparado con un 55% a 90% de las empresas.

Gráfica 2: Porcentaje de bienes y servicios financiados por el gobierno, que las entidades privadas y no lucrativas proveen directamente a los ciudadanos

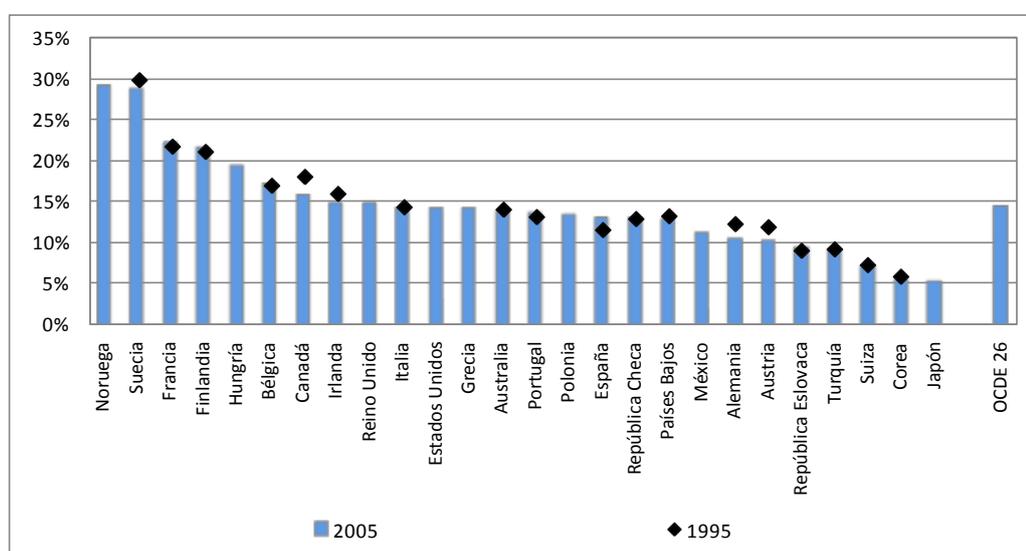


Si bien una mayor eficiencia es esencial, no será suficiente en la mayoría de los países. Los recortes presupuestarios a los programas podrían ser inevitables. Los gobiernos tendrán que pensar críticamente acerca de qué bienes y servicios deberán proporcionar y cuál es la mejor forma de proporcionarlos.

- Las grandes diferencias en el empleo público entre los países reflejan las opciones políticas sobre el alcance y el nivel de prestación de servicios públicos, así como el método elegido para ello (por ejemplo, si los servicios públicos serán prestados por empleados del gobierno o del sector privado). La proporción de la fuerza de trabajo empleada en el gobierno en general oscila entre poco más de 5% en Japón y Corea a casi 30% en Noruega y Suecia (véase Gráfico 3). Sin embargo, el empleo en el sector público es relativamente sólido, los niveles se han mantenido estables durante la última década y la mayoría de los empleados trabaja en gobiernos locales y estatales. Por tanto, los gobiernos centrales podrían tener poco espacio de maniobra en términos de reducción de coste salarial.
- El país promedio miembro de la OCDE realizó en 2006 cerca de 60% de los gastos gubernamentales totales en programas sociales (incluyendo los programas de seguro de desempleo, asistencia médica, educación y pensiones), comparado con alrededor de 55% en 1995, lo

que muestra las difíciles decisiones a las que se enfrentan los responsables del diseño de políticas cuando lo que buscan es el ahorro. Dependiendo del nivel de la descentralización fiscal, estas decisiones pueden ser tomadas directamente por los gobiernos estatales y locales. En Suiza, donde el gobierno central representa menos de 15% de los gastos totales, los gobiernos estatales y locales desempeñan un papel mucho mayor en la financiación directa de los bienes y servicios. En comparación, el gobierno central representa 90% del gasto total en Nueva Zelanda.

Gráfica 3: Empleo en el gobierno en general como porcentaje de la fuerza de trabajo (1995 y 2005)



2. Crear una capacidad estratégica para hacer frente a problemas complejos

Es fundamental que los responsables de la toma de decisiones tengan datos correctos y adopten una visión estratégica sobre las respuestas de las políticas públicas. En particular, debido a la compleja naturaleza de los desafíos de política actuales, los gobiernos deben desarrollar sus capacidades para pensar y actuar a largo plazo, colaborar y coordinarse entre sus niveles y sectores, así como para analizar y procesar información diversa. Esto requiere de una fuerza de trabajo con habilidades y formación adecuadas, buena calidad en datos y análisis, e incentivos para adoptar una perspectiva a medio y largo plazos.

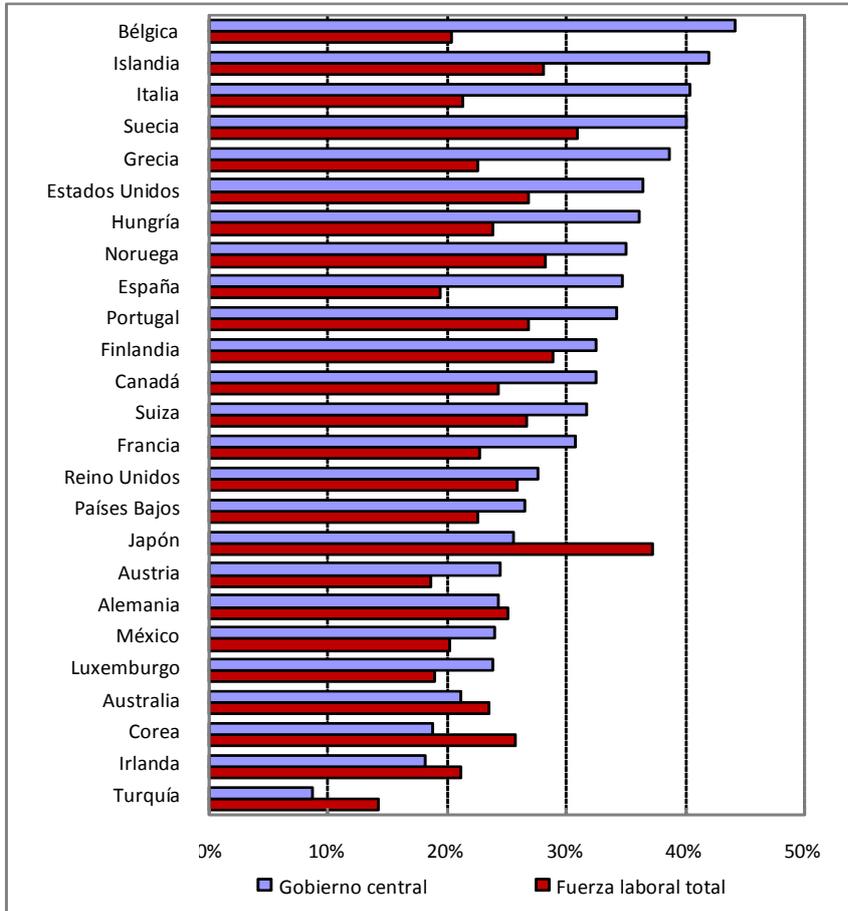
En los últimos 20 años, muchos gobiernos centrales han reformado sus prácticas de gestión de recursos humanos (GRH) para delegar más

decisiones a los ministerios, abrir la contratación a candidatos externos, introducir evaluaciones de desempeño y remuneración por desempeño, y crear una categoría especializada de directivo público.

El rostro de la fuerza de trabajo del gobierno central ya está cambiando.

- En muchos países de la OCDE los trabajadores del gobierno central están envejeciendo más rápido que los del mercado laboral general (véase Gráfico 4). En 14 países miembros de la OCDE, más de 30% de los trabajadores del gobierno central se jubilará dentro de los próximos 15 años. Si bien este cambio demográfico presenta un desafío para la continuidad y el liderazgo, es también una oportunidad para incorporar personal con nuevas habilidades y para reorganizar la estructura de la fuerza de trabajo.
- Las mujeres están participando cada vez más en los empleos gubernamentales, con frecuencia con índices más elevados que en la fuerza de trabajo total. De cada 100 funcionarios del gobierno central, 45 eran mujeres en 2006 comparado con 40 en 1995. Sin embargo, la plena igualdad aún no se ha logrado. Las mujeres están menos representadas en niveles más altos del gobierno central de lo que lo están en niveles inferiores, o en puestos administrativos.
- Por último, el rostro del gobierno es cada vez más “virtual” a medida que se ofrece más información y servicios en línea.

Gráfica 4: Porcentaje de empleados de 50 años de edad o más en el gobierno central y en la fuerza laboral general (2005)



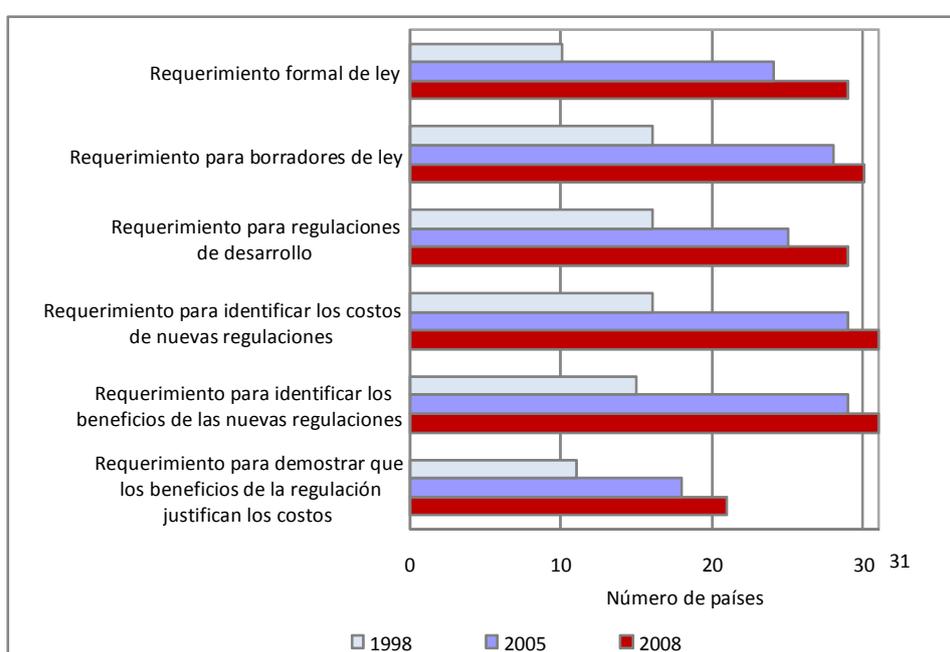
En el futuro, el sector público tendrá que dar forma a nuevas normas para el sector privado, que equilibren la responsabilidad pública y el interés privado. Esto implicará la creación de un marco regulatorio más equilibrado que evite los excesos y gestione adecuadamente los riesgos, sin inhibir la iniciativa empresarial y la innovación. Para lograr esto, es importante que los países desarrollen sistemas sólidos para la gestión regulatoria, incluyendo el uso del análisis de impacto, la consulta pública en el desarrollo de nuevas normas y estrategias para minimizar las cargas de las normas vigentes. Algunos elementos de estos sistemas ya están en marcha; sin embargo, quizá los gobiernos necesiten hacer más.

- El análisis de impacto regulatorio (AIR) es una herramienta clave de política que proporciona a los responsables de la toma de decisiones información detallada sobre los posibles efectos de las medidas

regulatorias, incluidos los costos y beneficios. En la última década, los sistemas de AIR se han vuelto más exhaustivos en casi todos los países. Sin embargo, su profundidad todavía difiere (véase Gráfico 5).

- Un gran grupo de países estuvo muy comprometido en las estrategias de simplificación administrativa en 2008. Algunas de las estrategias más comunes son el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación y un registro electrónico y requisitos de cobertura, tales como permitir a las empresas y a los ciudadanos presentar sus declaraciones fiscales y pagar los impuestos en línea.

Gráfica 5: Requerimientos de AIR en el nivel central de gobierno (1998, 2005 y 2008)



3. Mantener la transparencia y la rendición de cuentas

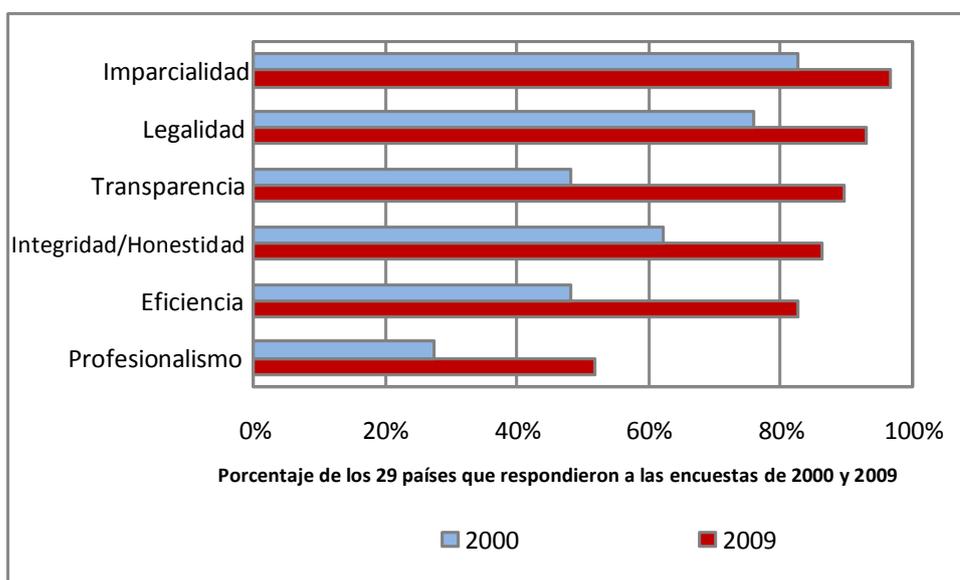
Las demandas de transparencia y rendición de cuentas por parte del gobierno han ganado un mayor apoyo en el contexto de los fallos públicos y privados que contribuyeron a la crisis financiera, así como la magnitud de la intervención y el gasto del gobierno que la crisis ha provocado. Las adquisiciones públicas representan entre 10% y 25% del PIB en los países europeos miembros de la OCDE antes de la crisis, y se han identificado como la actividad gubernamental más vulnerable a la corrupción.

Dentro del propio gobierno, la importancia de la transparencia ha aumentado considerablemente en la última década. El número de gobiernos que identifican la transparencia como un valor esencial casi se

duplicó entre 2000 y 2009 (véase Gráfica 6). Este mayor énfasis en la transparencia también se refleja en las reformas de los procesos presupuestarios, en las legislaciones que promueven el acceso a la información, en el fortalecimiento del marco de integridad en el gobierno y en la mayor utilización de la consulta pública.

- En la actualidad, el marco jurídico para un gobierno abierto está en gran parte en vigor en los países miembros de la OCDE. Consiste en leyes sobre el acceso a la información, la privacidad y la protección de datos, los procedimientos administrativos, las instituciones defensoras del pueblo y las instituciones supremas de auditoría.
- Todos los países miembros de la OCDE tienen una institución suprema de auditoría para auditar las cuentas del gobierno. Aunque al final todos los países ponen a disposición del público las cuentas auditadas, existe una variación considerable en el tiempo que se tardan en hacerlo. Menos de la mitad de los países miembros de la OCDE hacen públicas las cuentas en un periodo de seis meses después de que el año fiscal termina, como lo sugieren las Mejores Prácticas de la OCDE para la Transparencia Presupuestaria.
- Todos los países miembros de la OCDE, excepto dos, requieren que los responsables de la toma de decisiones en las ramas legislativa y ejecutiva divulguen los intereses privados a fin de evitar posibles conflictos de interés, aunque muchas declaraciones no están completamente disponibles para el público.
- Desde 2009, casi 90% de los países miembros de la OCDE proporcionan algún tipo de protección a los denunciantes de prácticas ilegales.
- Hay muchos mecanismos diferentes utilizados por los países miembros de la OCDE para involucrar al público en la elaboración de las regulaciones y en los últimos cinco años se ha incrementado el uso de la consulta. Mientras que la mayoría de los países miembros de la OCDE hacen consultas informales con grupos seleccionados, menos de dos tercios difunden anuncios públicos y solicitudes de comentarios.

Gráfica 6: Valores frecuentemente citados del servicios público (2000 & 2009)



© OCDE 2009

Este resumen no es una traducción oficial de la OCDE.

Se autoriza la reproducción de este resumen siempre y cuando se mencionen el copyright de la OCDE y el título de la publicación original.

Los resúmenes multilingües son traducciones de extractos de publicaciones de la OCDE editadas originalmente en inglés y en francés.

Pueden obtenerse en forma gratuita en la librería en línea de la OCDE
www.oecd.org/bookshop/

Si desea más información, comuníquese con la Unidad de Derechos y Traducciones, Dirección de Asuntos Públicos y Comunicación de la OCDE en: rights@oecd.org o por fax: +33 (0)1 45 24 99 30

Unidad de Derechos y Traducciones de la OCDE (PAC)
2 rue André-Pascal, 75116
París, Francia

Visite nuestro sitio www.oecd.org/rights/

